DEBATE EN LA UNIVERSIDAD MÁS ENDEUDADA DE CATALUNYA

Universitats descarta por ahora la intervención total de la UPC

La Generalitat opina que el déficit de cerca de 3 millones del 2013 es todavía asumible

El rector Fossas comentará con Castellà su plan B para reflotar la Politècnica

EL PERIÓDICO
MADRID

La Generalitat no ampliará, de momento, su grado de participación en la gestión de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pese al déficit de en torno a 3 millones de euros con que la entidad previsiblemente cerrará el ejercicio del 2013 y que se sumarán a los 111 millones que va acumulando desde hace más de un década. La Administración catalana, que desde el pasado marzo tutela y supervisa, a través de una comisión paritaria, la ejecución del presupuesto de la universidad, descarta pues la intervención total, ya que considera que estos nuevos números rojos son por ahora asumibles.

El Govern valora positivamente el efecto que ha tenido el estricto plan de saneamiento que se empezó a aplicar el año pasado en la UPC –y que supuso, entre otras cosas, el despido de casi 350 personas–, ya que ha permitido reducir en más del 75% el desajuste con que la UPC había cerrado el 2012, en que hubo un desvío negativo de 10,9 millones respecto a lo presupuestado.

Este es el mensaje que, según ha podido saber este diario, trasladará en breve el secretario general de Universitats, Antoni Castellà, al nuevo rector de la UPC, Enric Fossas, que ocupa el cargo desde el pasado 4 de diciembre. El encuentro, que en otras circunstancias sería una reunión meramente protocolaria y de toma de contacto, servirá, muy posiblemente, para hablar ya de números y para que Fossas presente, de paso, al secretario de Universitats su propio plan B para sanear la Politècnica.

La UPC está pendiente, en estos momentos, del resultado de dos auditorías internas, una financiera y otra sobre sus espacios y edificios, encargadas por el nuevo equipo de gobierno de la universidad. La segunda, en particular, determinará qué parte del patrimonio es susceptible de ser vendida, aunque la Generalitat no considera que esta sea la solución a la crítica situación de la Politècnica.

SALDAR DEUDA EN EL 2016 // A partir de las conclusiones de estos dos informes, que pueden tardar aún unos en conocerse, Fossas elaborará el presupuesto del 2014. La previsión es que en dos años la universidad deje de tener déficit y que si los números no deparan ninguna sorpresa o imprevisto, se pueda incluso empezar a pagar parte de la deuda acumulada a partir del 2016 o 2017, según ha indicado en alguna ocasión el rector.

Paralelamente, y ya a más largo plazo, la intención del nuevo equipo de gobierno universitario es estimular las jubilaciones anticipadas y promover la contratación de profesores asistentes entre docentes que ahora solo son interinos.

Pese a la voluntad de diálogo y las buenas intenciones que pueda plantear Universitats, fuentes de la UPC indican que Fossas podría aprovechar la ocasión para recordar que el recorte que la universidad viene sufriendo desde el 2011 en las aportaciones de la Generalitat suman ya el 30%, lo que dificulta enormemente la sostenibilidad de la entidad. A eso se añade el hecho de que en el contexto de crisis general, a la UPC (como al resto de universidades) cada vez le resulta más difícil encontrar financiación privada a través de las transferencias de conocimiento a empresas.

Que siga habiendo déficit pese al esfuerzo realizado el 2013 demuestra, opinan algunas voces, que el problema es estructural, fruto de la dispersión territorial y de una oferta de títulos a veces duplicada.

VARAPALO AL EJECUTIVO AUTÓNOMO

Freno en Madrid a la privatización de hospitales

El TSJM devuelve el caso a cada una de las salas y ralentiza el proceso

EL PERIÓDICO
MADRID

Vuelta al punto de partida. La privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales de Madrid seguirá de momento suspendida de forma cautelar hasta que decidan sobre este asunto los juzgados en los que recayeron inicialmente los recursos presentados contra esta decisión del Gobierno autonómico. Así lo decidieron ayer por 30 votos a favor frente a 14 los magistrados de la Macrosala Contencioso-Adminitrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), convocada por el presidente Gerardo Martínez Tristán, relacionado con el PP, con el objetivo de unificar la decisión sobre todos los procesos privatizadores.

La decisión, aunque no se pronunció sobre el contenido de los recursos, supone un espaldarazo a la suspensión temporal del proceso, paralizado desde septiembre en espera de una resolución judicial, y que se prolongará todavía más. Las tres empresas encargadas de la privatización sanitaria asumieron el vuelco que se ha producido y reconocieron que «va a suponer un serio retraso en el proceso».

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, pidió que «los recursos se resuelvan con rapidez para acabar con la incertidumbre». También aseguró que la decisión no afecta a los presupuestos del 2014, ya que se contempló la opción de que el proceso no siguiera adelante. Lasquetty negó que la decisión suponga volver al principio y mostró su intención de seguir adelante con la privatización, con la que espera ahorrar 130 millones de euros al año.

LOS MÉDICOS, SATISFECHOS // Para el líder del Partido Socialista en Madrid, Tomás Gómez, la Comunidad de Madrid ha perdido esta batalla privatizadora, Le pidió al presidente, Ignacio González, que «aparque» el proyecto, tras la desautorización de los tribunales, a pesar de haber tratado de condicionar su decisión.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) promotora de los recursos, se mostró muy satisfecha. Consideró «acertada» y «favorable a sus intereses» la decisión y anunció que presentará más recursos, lo que podría volver a ralentizar la privatización. En el caso de que se dé la razón a las asociaciones médicas, la suspensión seguiría adelante y la externalización quedaría, prácticamente, herida de muerte, ya que obligaría a la Comunidad de Madrid a presentar un nuevo concurso.

EFE / CHEMA MOYA

►► Concentración contra la privatización hospitalaria, ayer, ante el TSJM.

Cospedal implantará el copago hospitalario, pero lo asumirá su Gobierno

►► La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que su Gobierno cumplirá la ley que obliga a implantar el copago en los medicamentos dispensados en los hospitales, pero anunció que será la Junta la que asuma el coste de esas medicinas, para que ningún enfermo grave tenga que pagar por ellas.

►► La secretaria general del PP se desmarca así de la orden del Ministerio de Sanidad, que la pasada semana recordó a todas las comunidades que la implantación del copago de fármacos hospitalarios es «de obligado cumplimiento» y que se trata de un procedimiento que debe ponerse en marcha a lo largo del presente mes de enero.

VOTO PRELIMINAR

La Eurocámara quiere reforzar la reducción de CO_2 en el 2030

EL PERIÓDICO
BRUSELAS

El Parlamento Europeo se pronunció ayer a favor de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero en el 40% en el 2030 con respecto a los niveles del 2010. La propuesta se enmarca dentro de los nuevos objetivos del marco energético y de clima para el 2030 de la Unión Europea.

Las comisiones de Medio Ambiente e Industria, Investigación y Energía de la Eurocámara votaron de forma conjunta a favor del informe de partida, que también incluye elevar hasta el 30% el uso de energías renovables. «Hemos pedido a la Comisión Europea que elabore una propuesta ambiciosa con estos objetivos vinculantes», declaró la diputada belga Anne Delvaux (PP), defensora del texto que ahora deberá ser ratificado por el pleno de la Eurocámara y que servirá para que el Ejecutivo comunitario prepare el marco energético y de clima para 2030. Los Veintiocho abordarán este asunto en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 20 y 21 de marzo.

El portavoz socialista Andrés Perelló valoró en un comunicado que el apoyo de los partidos mayoritarios europeos a esta iniciativa supone una petición para que el presidente de España, Mariano Rajoy, «cambie radicalmente el rumbo de sus políticas energéticas y climáticas».